

# Jitomate, actores y controversias en Sayula, Jalisco

VÍCTOR MANUEL CASTILLO GIRÓN<sup>1</sup>

Se explican diversas percepciones de los actores económicos en relación a las actividades productivas de la agroindustria que opera en la cuenca agrícola de Sayula, Jalisco. Se exponen los argumentos de los empresarios y de los propietarios de las tierras que aquellos cultivan, bajo contrato de arrendamiento. Desde el punto de vista de estos actores, ellos optimizan el uso de los recursos productivos disponibles en la zona e igualmente sostienen que sus acciones han sido incentivos importantes para la innovación tecnológica y de una nueva cultura de organización entre los agricultores locales. Desde una posición contraria se presentan los cuestionamientos que otros habitantes de la zona en cuestión han venido realizando en torno a las actividades agrícolas que ha desarrollado durante la última década la agroindustria de referencia. A este respecto, nos centramos en sus observaciones respecto a la contaminación ambiental y la violación de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.

Resumen - Abstract

Diverse criteria about the economic factors is explained in relationship with the productive activity of the agricultural industry that operates in the crops of the area of Sayula, Jalisco. The viewpoint of the landowners and the entrepreneurs is exposed; those who harvest do so on lease. From the point of view of these factors, they make the most out of the resources that area available to them within the area and they also sustain that their actions have been greatly encouraging for the renewal of technology, as well as a new organization culture among local farmers. From an opposite side, different questions that other inhabitants have been asking represented; these are about the activities that have been developed throughout the last decade in reference to the agricultural industry. In this respect, we are focused on their observations about environmental pollution and the violation of human rights of agricultural workers.

## Introducción

Desde hace casi una década, la cuenca de Sayula ha ocupado un lugar preponderante entre las áreas agrícolas del estado de Jalisco por su aportación a la producción mexicana de jitomate para el mercado de exportación, principalmente en el periodo de octubre a enero. Esta vocación exportadora está asociada con la participación de unas cuantas empresas hortícolas que en mayor o menor grado tienen relación con los consorcios que controlan el mercado de hortalizas de las grandes centrales de abastos del país y del sur de Estados Unidos.

En este trabajo me interesa resaltar los aspectos de mayor relevancia en la discusión sobre las externalidades<sup>2</sup> de las actividades productivas de seis agroempresas que produjeron jitomate en la cuenca de Sayula durante el ciclo 1999-2000. Para el análisis me baso en la informa-

ción obtenida mediante 116 entrevistas aplicadas, entre julio de 1998 y junio de 2000, a igual número de productores agrícolas, así como a 34 empresarios agrícolas y funcionarios de las dependencias de gobierno que operan en la zona. Los individuos entrevistados no fueron seleccionados mediante ninguna técnica estadística; más bien son personas que decidí entrevistar atendiendo ya sea a su prestigio local como conocedores de la estructura y su disposición al diálogo o bien el papel relevante que desempeñan en los acuerdos contractuales en que se sostienen las actividades productivas en cuestión. Por otra parte, si bien las entrevistas se realizaron con base en guías con preguntas previamente elaboradas, generalmente transcurrieron a manera de diálogo abierto, usando grabadora en la mayoría de los casos, procurando obtener datos cualitativos que pudieran ayudarme a alcanzar una cobertura amplia del proceso de referencia. En este con-

Víctor M. Castillo Girón es doctorante en Economía Rural por la Escuela Nacional Superior de Agricultura, Montpellier, Francia. Actualmente labora como profesor-investigador y como jefe del Departamento de Estudios Regionales-Ineser del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Autor del libro: Solo Dios y el Norte: migración y desarrollo en una región del estado de Jalisco (1995). Coautor del libro: Mercados regionales de trabajo y empresa (1999). Correo electrónico <victorm@cucea.udg.mx>.

texto, los datos presentados si bien carecen de rigor estadístico, son sintomáticos de las acciones que los actores contratantes asumen en los casos analizados.

Comienzo resaltando uno de los efectos positivos que los empresarios hortícolas –compartidos por quienes les ceden sus tierras en arrendamiento– creen generar para el resto de los habitantes de la cuenca de Sayula. Enseguida expongo los temas en que se inscriben las principales críticas de las personas que no participan directamente en esta forma contractual: la degradación de los recursos productivos y la contaminación ambiental, así como las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, principalmente de los jornaleros indígenas. Antes de entrar en estos aspectos, presento los rasgos más relevantes de la cuenca de Sayula y algunos datos distintivos de la producción de jitomate.

### La cuenca de Sayula: ubicación y vocación agrícola

La cuenca de Sayula forma parte de la zona que algunos llaman la depresión de Sayula, ubicada en el sur de Jalisco. Vista en un plano, su forma se asemeja a una media luna que abarca la porción sur de la gran llanura salina que antes ocupaba el casi extinto vaso lacustre de la laguna de Sayula. Las partes accidentadas de la Sierra de Tapalpa delimitan al poniente la cuenca de Sayula, mientras que al oriente y el sur sus límites son las estribaciones de la Sierra del Tigre. Su área mide aproximadamente 6 000 hectáreas de terrenos planos y semiplanos<sup>3</sup> y, con excepción de una muy pequeña porción del extremo noroccidental que pertenece al municipio de Amacueca, prácticamente toda esta superficie se localiza en el municipio de Sayula. La cabecera municipal es la localidad del mismo nombre y se encuentra 110 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y 25 kilómetros al norte de Ciudad Guzmán, centro de la región llamada el “sur de Jalisco”.

Hasta finales de la década de los ochenta, la alfalfa era el principal y casi único cultivo que se producía en los terrenos agrícolas de la zona.<sup>4</sup> De hecho, la cuenca de Sayula era considerada una de las principales regiones alfareras de Jalisco y del occidente de México. Por entonces la alfalfa (en verde, en paca, deshidratada) que allí se producía era comprada por los ganaderos de Los Altos de Jalisco y de diferentes localidades comprendidas entre la capital jalisciense y Manzanillo, Colima.

A principios de la década de los noventa, esta especialización comenzó a cambiar. Según nuestros entrevistados, los problemas que se suscitaron en la actividad ganadera, junto con el retiro de los subsidios a la electricidad, marcaron el principio del fin de “la época de oro de la alfalfa”. El número de clientes de la alfalfa disminuyó fuertemente y se alargaron los tiempos de almacenamiento de la alfalfa deshidratada. Con los incrementos de los costos de producción y de transformación, cada vez fue más difícil competir con los precios de las harinas alimenticias importadas o con las empresas de alimentos más modernas del Bajío guanajuatense.

Como consecuencia de esos problemas, la superficie cultivada con alfalfa disminuyó en forma notable. Actualmente en una parte de estas tierras se produce una variedad de cultivos entre los que destacan la semilla híbrida de maíz, el brócoli, el pimiento morrón, la cebada maltera, la papa y sobre todo el jitomate.

Durante el ciclo de mayo de 1999 a enero de 2000 el jitomate se cultivó en unas 1 500 hectáreas. Con base en el trabajo de campo realizado, considero que los productores de jitomate eran apenas una docena, quienes según el destino y el volumen de su producción pueden ser clasificados en dos grupos, uno conformado por productores que cultivan pequeñas superficies y cuyos productos se comercializan en los mercados regionales, particularmente en Guadalajara y otro integrado por seis empresas con una superficie que oscilaba entre 150 y 400 hectáreas cada una.

Por la forma de acceso a la tierra para producir el jitomate, estas empresas se pueden clasificar en tres grupos. En el primero encontramos a Bonanza 2001 y a Empaques Santa Anita, que fueron las primeras en iniciar operaciones en la cuenca. Ambas cultivan tierras propias, pero sobre todo rentadas. En el segundo sólo se ubica la empresa Rancho Alegre. Sus propietarios son herederos del general Marcellino García Barragán, quien fuera gobernador de Jalisco de 1943 a 1947 y Secretario de la Defensa nacional en los años sesenta. Es la tercera empresa que comenzó a operar en la zona y sólo siembra tierras de su propiedad. El tercer tipo está conformado por Agrícola Pony, UTSA y Chajoma, las de más reciente operación en el área. Ninguna de ellas cultiva tierras propias. La primera trabaja en tierras de los ejidatarios de Usmajac; la segunda cultiva parte de las tierras que antes arrendaba Empaques Santa Anita, y las tierras sembradas por la última pertenecen a tres de los principales

propietarios de tierras locales, quienes arrendaron sus tierras con la condición de que también ellos recibirían un porcentaje de las utilidades.

De acuerdo con algunos de los entrevistados, alrededor del 80 por ciento del jitomate producido por las empresas que operan en la cuenca de Sayula se exporta, principalmente al mercado estadounidense. En general, estas empresas utilizan tecnología de punta en el proceso productivo y pertenecen a los grandes consorcios que controlan el mercado de hortalizas de las grandes centrales de abasto del país e incluso del sur de Estados Unidos o están asociados con ellos. Los entrevistados coinciden en señalar que la presencia de estas empresas en la cuenca de Sayula tiene que ver con las condiciones climáticas de esta zona para producir jitomates de buen sabor, consistencia y calidad para la exportación entre los meses de octubre y enero, cuando otras zonas hortícolas del país y de Estados Unidos disminuyen su producción o no producen.<sup>5</sup>

### Las disyuntivas sobre los efectos locales de este tipo de agricultura

En la cuenca de Sayula, el cultivo del jitomate se incrementó a partir de 1992, cuando las empresas Bonanza y Santa Anita, que habían estado operando en el vecino valle de Autlán, Jalisco, comenzaron a tomar predios en arrendamiento, sobre todo de más de 20 hectáreas y que fueran irrigables. El dinero que los empresarios ofrecían a quienes estuvieran dispuestos a permitirles el uso de sus predios por tres a cuatro años apareció como una opción que tendría un efecto inmediato para sobreponerse a la crisis de la alfalfa. Por eso la población local nada o muy poco reparó en los efectos negativos de esta actividad, aun sabiendo que el cultivo de hortalizas en Autlán con el paso del tiempo afectó las condiciones productivas de aquella zona.

Sin embargo, las opiniones sobre los efectos de esta actividad en el entorno poco a poco empezaron a cobrar forma. En efecto, en 1997 los padres de los estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 19 de Sayula se manifestaron públicamente contra los posibles efectos negativos en la salud de sus hijos de la aplicación de pesticidas en los campos cultivados de jitomate que circundan las instalaciones escolares. Un año después, las demandas contra el sistema de producción del jitomate se intensificaron por la pre-

sencia de la prensa estatal y nacional, que cuestionaba las condiciones laborales de la población indígena que acude temporalmente a Sayula desde varios estados del sur del país. En este apartado abordamos tres aspectos en los cuales, desde mi punto de vista, se han concentrado las discusiones durante los últimos años.

### *La producción de jitomate como incentivo para la innovación tecnológica y la organización de los agricultores locales*

Los representantes de las empresas hortícolas citadas y los dueños de las tierras sembradas con jitomate, mediante un contrato de arrendamiento con las agroempresas, coinciden en señalar que la presencia de las empresas jitomateras no sólo ha traído beneficios a quienes contratan directamente con ellas. Consideran que a lo largo del proceso los resultados impactan positivamente tanto el desarrollo agrícola regional como el de los otros sectores o actividades ajenas a la agricultura.

En este sentido, sostienen que la presencia de la empresa ha inducido modificaciones en las prácticas de los agricultores que se mantienen al margen de la contratación con las empresas productoras de jitomate. Parecen estar convencidos de que algunos de los agricultores locales más dinámicos que han adquirido recientemente equipo y maquinaria agrícola, lo hicieron al ver los resultados obtenidos por las empresas. Así mismo, aseguran que algunas de las nuevas técnicas de producción de estos agricultores han sido aprendidas luego de consultar a los técnicos de las empresas o bien mediante la observación directa de los métodos que utiliza el personal que labora en estas agroempresas.

En este contexto tiende a ubicarse el protagonismo de algunos agricultores locales, como la familia Cueto, que si bien tiene como su cultivo principal el brócoli que demanda la empresa La Huerta, se han visto beneficiados con la presencia de gran cantidad de vendedores de agroinsumos y de tecnología atraídos por la presencia de las empresas jitomateras.

De hecho, algunos de nuestros entrevistados confían en que varios rancheros locales ya cuentan con equipo y maquinaria moderna y han aprendido lo suficiente sobre el cultivo de hortalizas para mantener un sistema eficiente de producción. Consideran que si las empresas decidieran abandonar la zona varios agricultores locales podrían asociarse para continuar cultivando este mismo tipo de pro-



ductos agrícolas. Según ellos, la estructura productiva con que opera Bonanza 2001, por ejemplo, ha hecho reflexionar a varios de los agricultores locales sobre las limitaciones del trabajo independiente con que operaban en los años ochenta los mayores productores de alfalfa de la zona. Aseguran que el esquema de administración y comercialización de la empresa Bonanza 2001 es una experiencia que los rancheros de la zona pueden reproducir si en un momento dado deciden cultivar conjuntamente 300 o 400 hectáreas con hortalizas.

### La degradación de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente: dos visiones encontradas

#### *La posición del Grupo Amigos de la Naturaleza*

A partir de 1997, la presencia de algunos representantes del gobierno estatal y de medios informativos de la ciudad de Guadalajara para analizar las causas y consecuencias del incendio de un albergue de trabajadores indígenas procedentes del sur del país a cosechar el jitomate de Sayula hizo que un grupo de ciudadanos tomaran conciencia e hicieran esfuerzos para corregir los problemas que esta actividad genera en su entorno. Agrupados bajo los nombres de Colectivo de Atención a Ciudadanos o como Grupo Amigos de la Naturaleza, consideran que las principales molestias que causan las agroempresas se derivan, por una parte, del uso abundante e incorrecto de pesticidas y, por otro, del humo ocasionado por los neumáticos que las empresas queman para proteger a los cultivos de las bajas temperaturas.

Los médicos locales asocian *a priori* estos factores con el incremento, sobre todo en el periodo de cosecha, del número de pacientes con enfermedades respiratorias y de la piel. Si bien no se cuenta con un registro del número de casos, los entrevistados aseguran que el cultivo de hortalizas ha incrementado notablemente el número de personas intoxicadas por el uso de pesticidas. Pero consideran que lo más grave es que esta situación afecta no solo a los trabajadores que aplican los pesticidas y a los jornaleros que los inhalan al estar trabajando en las áreas del cultivo.<sup>6</sup> Los agroquímicos empleados también perjudican la salud de todos los habitantes de Usmajac, El Reparo y la de quienes viven en la periferia de Sayula. Esto ocurre tanto por los deficientes métodos de aplicación, particularmente el de aspersión aérea usado por la empresa Cha-

joma, como porque los campos de cultivo terminan inmediatamente donde inician las áreas urbanas.

Siempre en un plano intuitivo, basados en el supuesto de que las plantas de jitomate de los predios son cada año más pequeñas, algunos de los integrantes del Grupo Amigos de la Naturaleza consideran que el exceso de sustancias químicas ya está empobreciendo los suelos agrícolas de la cuenca. Según ellos el hecho de que las empresas se nieguen rotundamente a proporcionar información sobre las condiciones en que se encuentran los predios cultivados es una evidencia más de la alteración que están padeciendo las tierras agrícolas. Temen que la estructura geomorfológica de esta cuenca cerrada facilite la acumulación de productos tóxicos e incremente el nivel de la degradación de los recursos.

Como muestras de los últimos cambios ocurridos en el área, señalan que debe extraerse el agua de pozos cada vez más profundos e incluso la desecación de algunos que se ubican en los pies de monte. Sin olvidar que en ello tengan que ver los cambios climáticos, también relacionan el abatimiento de los mantos acuíferos con: 1) el lanzamiento de cohetes o fuegos artificiales que hacen las empresas para dispersar las nubes, y 2) la intensa tala de árboles que se realiza para acondicionar los campos de cultivo y cubrir la demanda de leña utilizada como combustible en la preparación de los alimentos por los migrantes indígenas que trabajan como jornaleros temporales en el cultivo del jitomate.<sup>7</sup>

Ahora bien, para el Colectivo de Atención a Ciudadanos quienes arriendan sus tierras se convierten en simples terratenientes, y pierden su categoría de agricultores y, por lo tanto, la posibilidad de asegurar la calidad de suelo y agua cuando les sean devueltas. Dicen que estos actos no deben ser sólo del dominio de los arrendadores y agroempresarios, sino más bien de interés público, ya que todos los individuos tienen derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Temen que las empresas abandonen el área una vez que la tierra, el agua y el medio ambiente sufran mayor deterioro, como ocurrió antes con el valle agrícola de Autlán-El Grullo.

Bajo tales premisas, en 1999 enviaron al gobernador del estado una carta firmada por alrededor de cinco mil personas en la que solicitaban mayor atención de las diferentes instancias de gobierno a los problemas de contaminación generados por las agroempresas. Presionadas por los hechos, las empresas, las autoridades municipales y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo

Rural (Sagar) acordaron poner en operación un comité municipal que permita regular la sanidad vegetal con base en una agenda mínima de planeación y organización de las actividades agrícolas de la zona. Desafortunadamente, según algunos entrevistados, el comité no es viable tanto por la participación mayoritaria de los empresarios como por la tibieza, falta de interés y hasta de capacidad de actuación tanto de las autoridades municipales como de los técnicos de la Sagar. Como muestra de tales deficiencias, en 1999 todos los entrevistados coincidían en apuntar los peligros de sanidad vegetal que representaban los desechos plásticos dejados en los predios sembrados anteriormente por Empaque Santa Anita.

En ese contexto, sus últimas acciones han insistido en 1) la necesidad de que los arrendadores incluyan en los contratos de arrendamiento de tierras cláusulas que protejan los recursos naturales que son objeto de la transacción, y 2) la elaboración y aprobación de un reglamento municipal para el establecimiento y funcionamiento de las agroempresas. El problema, sin embargo, es que los empresarios, e incluso los arrendadores de tierras, muestran poca disposición a aceptar las propuestas, por un lado y, por otro, que seis de los once integrantes del cabildo municipal durante el periodo 1997-2000 se oponían a la aprobación del reglamento: unos consideraban que ello es competencia de las instancias del gobierno estatal o federal, y otros mantenían buenas relaciones con las agroempresas que operan en la cuenca.

#### *La percepción empresarial*

En el otro extremo, los agroempresarios no aceptan el señalamiento de que ellos solamente buscan maximizar sus utilidades aun a costa de la degradación de la tierra y el agua que toman en arrendamiento. Niegan que la cuenca de Sayula padecerá los mismos problemas de plagas y enfermedades que afectaron la horticultura del valle agrícola de Autlán-El Grullo. En este sentido, los técnicos entrevistados coinciden en señalar que el clima de Sayula presenta mejores opciones. Aseguran que en Sayula existe una temporada de invierno más definida que en Autlán, lo cual constituye, por una parte, una forma de control natural de las plagas y, por otra, obliga a dejar descansar la tierra o, en todo caso, a producir cultivos alternativos durante la temporada chica (de febrero a mayo).

Asimismo, precisan que la tecnología y los métodos de producción ahora son más eficientes que antaño. En

este sentido, aseguran que los insumos son de mejor calidad, que ha bajado su toxicidad. Por lo demás, los funcionarios entrevistados coinciden en señalar que, en virtud de que su principal mercado es el estadounidense, invariablemente las empresas deben cumplir con la regulación de la Sagar y con las normas fijadas por el gobierno de Estados Unidos en cuanto al uso de agroquímicos. Como parte de esta lógica exportadora, Bonanza 2001 y Rancho Alegre en 1999 ya habían instrumentado programas de "manejo integrado de plagas" con el fin de sustituir los agroquímicos por insectos depredadores de las plagas. Sobre el origen de las varas y la acusación de los problemas de deforestación respectivos, el administrador agrícola de UTSA asegura que este material es adquirido en la costa sur de Jalisco. Sobre el mismo aspecto, desde fines de 1998 (*Tzaulán*, de noviembre de 1998) los empresarios de Bonanza 2001 contemplaban sustituir el estacado de madera por una "caña" importada de Cuba. Respecto a la degradación de los suelos, los representantes de Bonanza 2001 manifestaban que los análisis periódicos hechos a sus tierras de cultivo eran negativos respecto a la contaminación. Incluso aseguraban que gracias al uso de mejoradores de tierra de tipo orgánico sus rendimientos de jitomate por hectárea eran cada vez mayores.

Por lo que corresponde a la conservación del agua, la posición de los empresarios no es menos halagüeña. En general, presumen que el sistema de riego por goteo presenta menores pérdidas en el manejo del agua que el sistema de riego por aspersión que utilizan los agricultores locales. De acuerdo con un ex funcionario de Bonanza, las empresas cuidan al máximo la calidad del agua del subsuelo porque éste es un factor que otorga ventaja competitiva a las hortalizas producidas en la cuenca sobre las de otras regiones agrícolas donde el agua de riego proviene de fuentes superficiales y, por lo tanto, con mayor presencia de elementos contaminantes. Eso es más determinante aún para los mercados estadounidenses.

#### *Los trabajadores del jitomate: las disyuntivas sobre una especialización por discriminación*

Según el responsable de las primeras operaciones de Bonanza en la zona, el cambio del cultivo de alfalfa a la horticultura no sólo amplió la oferta de trabajo, sino también las posibilidades de que un gran número de personas tengan un empleo durante todo el año o al

menos los ocho meses que dura la temporada larga. La llegada de las agroempresas, continúa diciendo este informante, también propició un incremento en los salarios que venían percibiendo los trabajadores agrícolas empleados en el cultivo de alfalfa.

Ahora bien, quienes cuestionan las actividades productivas de las agroempresas suponen que en un análisis costo-beneficio éstas generan más problemas que las utilidades que dejan en la región. Según el director de Promoción Económica del Ayuntamiento de Sayula,<sup>8</sup> con las actividades de estas empresas hortícolas han aumentado los problemas de contaminación ambiental, así como de cobertura de los servicios básicos de salud, agua potable y seguridad pública. Contrariamente, continúa diciendo, fuera de un mínimo de empleos para la población local, prácticamente no hay ningún beneficio económico para el municipio: las empresas sólo hacen un pago anual de 16 pesos por concepto de una licencia de registro del giro o actividad y la población flotante, particularmente los jornaleros indígenas migrantes, apenas gastan lo necesario para subsistir y lo demás se lo llevan a sus lugares de origen.

En este apartado me interesa exponer las apreciaciones de la situación imperante en la cuenca de Sayula sobre las condiciones laborales de estos trabajadores indígenas. Lo hago porque en ello, como en los problemas de contaminación ambiental, centran sus críticas más severas quienes se oponen a la forma de actuar de las empresas hortícolas que operan en la cuenca de Sayula. Antes presento el perfil general del resto de personas que laboran en dichas agroempresas. Una parte de estos trabajadores son originarios de la región, y son el eslabón en el cual los ciudadanos que impugnan las actividades hortícolas reconocen cierta bondad de estas actividades productivas. Para distinguirlos de los trabajadores indígenas, me referiré a este grupo de empleados como los trabajadores no indígenas.

### Los trabajadores no indígenas

Estos empleados pueden separarse en dos grupos: los directivos y los trabajadores. Entre los primeros se encuentran personas con estudios universitarios, quienes junto a los accionistas o dueños, son responsables de la planeación y administración de las actividades de la empresa. Entre ellos figuran el gerente de producción, el administrador contable y el gerente comercial. Si bien algunos

de estos individuos son de la localidad, la gran mayoría proceden de otras partes del país, principalmente de Sinaloa, e incluso de Israel, España y Cuba.

Por su parte, los trabajadores de la empresa, en general pueden agruparse a su vez en dos. Los trabajadores permanentes son aquellos encargados de las tareas que requieren un nivel básico de instrucción por parte de quien las realiza. Entre ellos encontramos a los encargados de campo y de riego, el responsable del invernadero, el jefe de almacén, el jefe de compras y el jefe de empaque. En esta misma categoría pueden hallarse una serie de empleados capacitados en la operación del equipo y la maquinaria necesarios para la preparación del suelo, el surcado, el acolchado o cubrimiento de los surcos con plástico y la perforación del mismo, el riego y todas las actividades que requieren mayor precisión tanto en la fase de producción como en la de empaque de los productos.

Ahora bien, según el principal responsable de las primeras actividades de Bonanza en la cuenca de Sayula, la escasez de este tipo de trabajadores fue uno de los principales obstáculos que se enfrentó en sus inicios. Por esa razón, sigue diciendo, en un principio ellos tuvieron que llevar personal desde Autlán, que entonces era su principal centro de producción. El mismo entrevistado asegura que con el paso del tiempo la población local fue incorporándose a los grupos especializados de trabajo, incluyendo los niveles de mayor jerarquía. Con la presencia de más empresas que pueden demandar estos recursos humanos, tanto Bonanza 2001, Santa Anita y Rancho Alegre buscaron retener a estos trabajadores de manera permanente.

En 1999, Agrícola Poni, Chajoma y UTSA, las empresas de más reciente incorporación en la zona, parecen confirmar las apreciaciones anteriores pues su personal en un principio era mayoritariamente de Sinaloa.<sup>9</sup> Según el responsable administrativo de Agrícola Poni, su empresa movilizó a Sayula parte del personal que labora permanentemente en sus campos agrícolas de Sinaloa porque ello le garantiza que los trabajos se ejecuten con más rapidez y con mejor calidad. Asegura que la poca mano de obra especializada que existe en Sayula es retenida por las empresas de mayor arraigo o bien quieren ganar altos salarios y trabajar poco.

Por su parte, los trabajadores eventuales pueden dividirse en dos tipos: los empacadores y los jornaleros para el trabajo en el surco. Veamos primero lo que respecta a los trabajadores del empaque.



Según cifras del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural número 38 en Sayula, una hectárea de jitomate requiere 409 jornales, cantidad que se divide prácticamente en partes iguales entre las labores de producción y las de cosecha y empaque del producto.

En los empaques hay un claro predominio de la mano de obra femenina. Los hombres que allí trabajan realizan las actividades que requieren mayor fuerza física, tales como descarga y carga de los camiones que transportan los productos cosechados al área del empaque y hacia los centros de distribución y venta. Entre ellos, principalmente en los casos de esubadores y los montacargistas, también predominan las personas originarias del estado de Sinaloa.

A las mujeres les corresponde la "selección" y el "empaque", que son las labores centrales en los empaques. El responsable del área agrícola de UTTSA<sup>10</sup> argumenta que esta separación del trabajo por género se debe a la mayor "sutileza" que tienen las mujeres para manejar los productos sin afectar su consistencia. Según nuestro informante arriba citado y uno de los ex administradores de Bonanza 2001, alrededor del 95 por ciento de las mujeres que trabajan en los empaques de la cuenca provienen de Sinaloa.

Cuestionados sobre las razones por las cuales es muy baja la participación de la mano de obra femenina local, el último de estos informantes asegura que desde el principio los padres de familia de la zona han sido muy reacios a aceptar que sus hijas trabajen en los empaques por los problemas de salir en la madrugada y laborar junto con los varones. Sin negar la validez de esta explicación, aquí también debe considerarse la observación de Barrón (1999: 267), quien precisa que los productores de hortalizas prefieren la mano de obra migrante porque la población local tiene mayor capacidad para rechazar las decisiones que toma el patrón.<sup>11</sup>

De acuerdo con la misma autora, las seleccionadoras y empacadoras de Sinaloa son la parte medular de un flujo migratorio que realiza estas labores en las diferentes regiones hortícolas del país. En la fase de la selección, son consideradas como un elemento importante para garantizar que los productos sean clasificados correctamente en función de su color (cinco tonalidades), tamaño (seis) y defectos observables a simple vista. La acción del empaque consiste en tomar con la mano cada uno de los jitomates y meterlos en la caja de cartón correspondiente. Aquí, además de la "delicadeza" y el cuidado para no

maltratar el fruto se requiere velocidad ya que el monto de su pago está en función del número de cajas que se llenen. Las más experimentadas pueden ganar hasta 500 pesos por día. Durante su permanencia en Sayula, rentan casas donde viven gran número de estas trabajadoras.

Las mujeres locales, en cambio, generalmente se desempeñan como "rezagadoras", quienes se encargan de seleccionar los jitomates que por su tamaño, color o algún defecto visible son considerados de mala calidad para su exportación o venderlo en el mercado nacional. A ellas se les paga por jornada de trabajo de acuerdo con el salario vigente en la zona. Los empresarios entrevistados sugieren que a la mano de obra local no le interesa especializarse en la selección y el empaque. En lo personal, creo que tampoco les ofrecen suficientes posibilidades de entrenamiento para esas ocupaciones. Después de todo alguien tiene que realizar el trabajo de las "rezagadoras", y muy probablemente las trabajadoras migrantes sólo se interesarían en hacerlo por un pago superior al beneficio marginal obtenido de esos productos.

En cuanto a los jornaleros agrícolas, conforme evoluciona el proceso productivo se incrementa el número de actividades en el campo. En efecto, entre los meses de junio y octubre, además de la plantación, se realizan uno o dos deshierbes manuales, se aplican pesticidas para combatir plagas y enfermedades de los cultivos, se fertiliza, se cortan los retoños indeseables, se ponen estacas e hilo para que sirvan de soporte a las plantas. De octubre a enero se efectúa la cosecha.

Puesto que los empleados permanentes no son suficientes para efectuar esos trabajos, las empresas se ven en la necesidad de contratar temporalmente mano de obra. No es fácil precisar cuántos trabajadores son contratados en esas condiciones. Sin embargo, las cifras anuales durante el periodo posterior a 1995 oscilan entre cinco a diez mil personas entre hombres, mujeres y niños. Tampoco puede decirse cuántos trabajadores locales participan de esta forma. No obstante, es evidente que la inmensa mayoría de estos trabajadores son jornaleros migrantes o "golondrinos" quienes, a decir del Colectivo de Atención a Ciudadanos, desarrollan las faenas más duras y peor pagadas (*La clave*, 31 de julio de 1999). Y por lo tanto, según el director de Promoción Económica del Ayuntamiento de Sayula (periodo 1997-2000), las menos atractivas para la población local.

Ahora bien, según Chávez (2000) alrededor del 70 por ciento de estos jornaleros migrantes son indígenas

mixtecos, nahuas, tlapanecos, mixes y triques, de los cuales apenas dos de cada diez hablan español, y de estos sólo la mitad terminó la educación primaria. El resto de los jornaleros "golondrinos" son mestizos originarios de San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Colima, Durango, Chihuahua, etc. Si bien todos hablan español, su escolaridad es de apenas entre dos y tres años de educación primaria. En cuanto a su relación laboral con la empresa, ésta no hace mayores distinciones respecto de los trabajadores indígenas. De esta manera, las apreciaciones del apartado siguiente pueden hacerse extensivas a estos jornaleros agrícolas mestizos.

### Los jornaleros indígenas

En Sayula, la presencia de los jornaleros indígenas se ha constituido en el principal elemento utilizado por diferentes actores para cuestionar la presencia de este tipo de actividades productivas en la cuenca. El debate se ha intensificado desde mediados de 1998, luego de la cobertura que la prensa y la televisión estatal dieron al quinto incendio grave registrado desde 1995 en los albergues donde se alojaban parte de los jornaleros de la empresa Santa Anita. Las críticas sostienen que la rentabilidad de este negocio se sustenta en gran medida en la sobreexplotación de estos jornaleros migrantes. Las demandas insisten en las deplorables condiciones en que se encuentran las viviendas o albergues que habitan los jornaleros migrantes. Más recientemente, y en un plano relativamente insignificante, han comenzado a subrayarse las condiciones de trabajo y de seguridad social de los jornaleros "golondrinos".

Veamos ahora la vida en los albergues. Los datos sobre el incendio citado arriba evidencian que los jornaleros migrantes son enganchados ya sea en sus lugares de origen o en otras zonas hortícolas donde comienza a disminuir la demanda de trabajo, con el compromiso de que en Sayula recibirán vivienda, escuela para sus hijos, servicios médicos, etc. Sin embargo, al llegar a la cuenca de Sayula generalmente se les da albergue lejos de los centros de población en gallineros abandonados, sin desinfectar e incluso aún con restos de gallinaza. Las habitaciones son espacios poco ventilados, antihigiénicos, de cartón y con cocinas al aire libre. Se carece de los servicios de energía eléctrica, agua entubada y drenaje. Se padece la desintegración familiar e impera un acceso limitado a la educación y los servicios de información modernos. En los

albergues, la dieta de los indígenas y mestizos que allí conviven es a base de frijol, tortilla y huevos.

Como ejemplo de las condiciones imperantes en los albergues, se citaba que en el conocido como El Ahijadero, de la empresa Bonanza 2001, había 276 viviendas con techos de cartón, de 12 metros cuadrados cada una (tres por cuatro metros) para 828 personas. Existían 72 letrinas, 12 regaderas y 40 lavaderos, lo que da un promedio de 69 personas por regadera, 11.5 individuos por letrina y 6.9 familias por lavadero. En esas condiciones, las autoridades municipales de salubridad aceptaban que la vida en los albergues representaba un alto riesgo de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. Por ejemplo, la Secretaría de Salud admitió que durante 1997, por razones ligadas al hacinamiento en los albergues, 14 de los jornaleros contrajeron tuberculosis y 40 se enfermaron de conjuntivitis.

A raíz de tales denuncias, diferentes instancias de los gobiernos estatal y federal reavivaron algunos planes de ayuda prometidos, pero no cumplidos, a la luz de los otros cuatro graves incendios precedentes. En general, las propuestas eran mejorar las condiciones de vida de los jornaleros a través de una inversión tripartita entre el gobierno federal, el gobierno estatal y la empresa. Al respecto, las respuestas de las dos principales empresas cuestionadas, Bonanza 2001 y Santa Anita, fueron diferenciadas.

Arturo Lomelí, frente a las acusaciones sobre las condiciones en que trabajaban los jornaleros agrícolas de Empaques Santa Anita, sostuvo que el problema era responsabilidad de los gobiernos estatal y federal porque los programas de vivienda, educación y salud eran competencia exclusiva del Estado y las autoridades gubernamentales no habían cumplido con un acuerdo firmado en 1997 mediante el cual se comprometían a aportar el 80 por ciento de los recursos necesarios para mejorar las condiciones de los albergues. De manera enfática, también sostuvo que su empresa había llegado a la cuenca a invitación expresa de las autoridades estatales de invertir en la agricultura de la zona. En ese mismo sentido, apuntaba que si construía viviendas no tendría recursos para el cultivo y, por lo tanto, tampoco fuentes de trabajo para los jornaleros. En 1999, cuestionados sobre la actitud de Santa Anita en cuanto a los albergues de sus peones, los propietarios de las tierras en que sembraba dicha empresa apuntaban que, más que pensar en la negligencia de los empresarios respecto a mejorar las condiciones de



vida de sus jornaleros, debía apreciarse una cuestión ligada a los problemas de liquidez financiera que venía enfrenando el grupo Lomelí. En 1998, al decrecer sus actividades productivas en la zona también los problemas de hospedaje de sus trabajadores no fueron significativos pues la gran mayoría de sus necesidades de mano de obra fueron cubiertas con peones de la zona.

Bonanza 2001, por su parte, sí puso en marcha diferentes acuerdos de participación conjunta con diversas dependencias gubernamentales para mejorar las condiciones de vida en los albergues de sus jornaleros migrantes. Dos meses después del incendio, el gobernador de Jalisco visitó uno de los albergues y la prensa constató, entre otros aspectos, que se estaban construyendo casas de concreto, había una mejora sustancial en los servicios de agua, energía y drenaje, la instalación y operación de consultorios médicos, la presencia de profesores para instruir a los niños en los albergues y el compromiso de otorgar un apoyo mensual en especie, así como un incremento en el salario de 40 a 45 pesos por jornada para los adultos con el objetivo de cubrir los ingresos que antes generaban los niños con su trabajo en el campo. Para Bonanza 2001, a decir de sus dirigentes, la ejecución de los programas tendientes a mejorar las condiciones de salud y laborales de sus trabajadores son parte de las acciones de política de la empresa para obtener cinco certificaciones de calidad<sup>12</sup> que garanticen su acceso permanente al mercado estadounidense.

Rancho Alegre, en cambio, prefirió intensificar la contratación de trabajadores locales, antes que contratar migrantes. Como lo haría más tarde UTSA, el déficit de mano de obra en la época de cosecha la cubren contratando jornaleros migrantes que hospedan en casas que rentan en las localidades de la zona, donde sin abandonar las condiciones de hacinamiento los jornaleros adaptan su espacio individual o familiar con cartones y plásticos.

Ahora bien, en 1999, al inició de la temporada grande (de mayo a enero del año siguiente), varios funcionarios de las dependencias gubernamentales involucradas en los programas de atención a los jornaleros migrantes aseguraban que las mejoras en los albergues de Bonanza 2001 eran una condición plausible. Paradójicamente, al mismo tiempo alrededor de cinco mil personas firmaron una carta dirigida al gobernador del estado solicitándole su intervención para evitar que dos de las empresas que acababan de incorporarse a las actividades productivas de la zona incurrieran en los mismos problemas causados

por Santa Anita. La carta no tuvo respuesta y los jornaleros contratados por Agrícola Pony, sobre todo por Chajoma, fueron alojados en las instalaciones de una antigua granja utilizada antes para la cría de pollos, con un baño para 100 personas y sin las mínimas atenciones de limpieza o desinfección. Asimismo, esta fue la primera ocasión en que la aplicación de pesticidas se efectuó empleando una avioneta, ante la indignación de los ciudadanos, que pidieron exigir a Chajoma un estudio previo de impacto ambiental, incluyendo los daños en la salud de la población.

Las condiciones de trabajo de los jornaleros indígenas migrantes<sup>13</sup> tampoco son las mejores. Ellos emigran junto con sus parejas e hijos. Generalmente llegan en grupos bajo la representación de uno de sus integrantes, llamado cabo, quien debe hablar el castellano y recibe el pago del salario de todo el grupo o cuadrilla que lo acompaña. En la mayoría de los casos, sobre todo para la cosecha, cuando aumentan las necesidades de mano de obra, estos trabajadores son "enganchados" en sus lugares de origen por individuos comisionados por las empresas para esos fines. Estos enganchadores hacen el trato de manera verbal con los cabos, quienes reciben un préstamo monetario para el viaje y los alimentos de sus cuadrillas. A diferencia de quienes acuden por su propia cuenta, que deben buscar vivienda, los jornaleros enganchados al llegar a Sayula reciben de la empresa comida y alojamiento, en las condiciones mencionadas.

Con excepción de los trabajos de cosecha, sus jornadas en la mayoría de los casos son de siete de la mañana a las seis de la tarde. El traslado de los albergues al lugar de trabajo y viceversa se realiza utilizando camionetas de redilas que se emplean normalmente para el transporte de animales o de mercancías. En 1999 el salario por día era de 40 pesos para los adultos. Los niños menores de 14 años reciben un pago menor que el de los adultos y su salario se incluye en el del padre porque no pueden ser considerados como trabajadores. Normalmente se descansa los domingos pero si es necesario se debe laborar todos los días, sin que ello implique un incremento del salario. Durante la cosecha el sueldo se define en función del número de cubetas que se llenen. El monto por unidad se determina a partir del hombre más hábil. Según el responsable del área agrícola de UTSA, en el invierno de 1999 algunas familias lograban ganar hasta 150 pesos por día.

Si bien los técnicos del Cader estiman que en Sayula una hectárea de jitomate requiere alrededor de 409 jorna-

les, según Chávez (2000: 45) las agroindustrias de la cuenca sólo declaran nueve jornales por hectárea cultivada ante el Seguro Social.<sup>14</sup> Así, una mínima parte de los jornaleros tienen derecho a un "pase" o atención médica en las clínicas del Seguro Social, pero ninguno de estos trabajadores eventuales tiene derecho a cobrar incapacidad o indemnización por riesgo de trabajo o muerte. De esta manera, la gran mayoría de los jornaleros que tienen algún problema de salud reciben los servicios médicos proporcionados por el ayuntamiento y la Cruz Roja de Sayula. En los casos más graves, los enfermos son trasladados al Hospital Civil de Guadalajara.

En su trabajo, Chávez (2000) dice que si bien Bonanza 2001 es la única empresa que durante 1999 tenía un contrato colectivo de trabajo con alguno de los sindicatos de trabajadores, éste sólo amparaba a los trabajadores administrativos pero no a los jornaleros eventuales. No obstante, en 1999 tanto Bonanza 2001 como Agrícola Pony y Chajoma les descontaban a sus jornaleros un peso por semana como cuota voluntaria para un sindicato. Así, los únicos derechos laborales que los jornaleros golondrinos creen tener son el pago del salario a tiempo cada fin de semana, que se les asegure el empleo durante su estancia y que se les proporcione un lugar en los albergues.

En este contexto, cuando los jornaleros tienen algún problema con sus patrones la mejor solución es buscar empleo en otra de las empresas o regresar a sus localidades de origen. Más recientemente, también han encontrado cierto apoyo con los integrantes del Colectivo de Atención a los Trabajadores Migrantes, quienes consideran necesario mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas. Entre otras cosas, reclaman que los jornaleros sean informados por escrito de las condiciones de trabajo, que reciban los salarios en los montos y fechas convenidos y que se evite ofrecer comida como parte de sus prestaciones. Lamentan el acoso y las amenazas de los capataces de la empresa contra aquellos jornaleros que quieren manifestar sus inconformidades. Se insiste, igualmente, en que las empresas se abstengan de aplicar fertilizantes o pesticidas mientras que los peones trabajan.

¿Hay *dumping* social o valores diferenciados sobre los derechos humanos? Para algunos de los entrevistados, las acciones y declaraciones de los empresarios del jitomate encierran el mensaje de un cierre de fuentes de trabajo que sirve de chantaje para esconder la producción de jitomate a menores costos. Aseguran que la falta de

respeto a los derechos humanos de los jornaleros es una prueba irrefutable del "*dumping* social" que manejan los jitomateros de Florida en relación con el jitomate mexicano. Para quienes demandan y promueven programas para mejorar la calidad de vida de estos trabajadores en Sayula, es necesario exigir el respeto cabal a los derechos de los jornaleros migrantes y de un medio ambiente de calidad.

Quiénes participan más activamente en la elaboración y aprobación de un reglamento para establecer y poner en funcionamiento en las agroempresas de la cuenca de Sayula comienzan a presionar para que el estado exija la salida de las empresas. Sin dejar margen para la convivencia con este tipo de agroindustria, consideran que el auge hortícola de la cuenca sólo deja unos pocos pesos, si no es que incluso deprime la economía local. Por otra parte, coinciden con los señalamientos del director del Departamento del Trabajo del estado de Jalisco, al señalar que los jornaleros migrantes no aportan beneficios a la región porque regresan a sus pueblos de origen con el dinero que ganan en Sayula. Precisan, además, que la gente de la región es desplazada de los trabajos por la presencia simultánea de migrantes que abaratan el trabajo de la cosecha y de trabajadores especializados en el manejo de maquinaria y equipo en las áreas de producción y de empaque que llevan a la zona las empresas desde sus otras zonas de producción, principalmente de Sinaloa.

Desde una posición más mesurada, el secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Jalisco advierte que las condiciones de vida de estos trabajadores deben dignificarse. Sin embargo, encuentra bastantes dificultades para mejorar pues según él tales actitudes parecen corresponder al modo de vida que acostumbra llevar los grupos étnicos que acuden a trabajar a Sayula. Cuestionado sobre la negligencia de los empresarios de Sayula en asumir su responsabilidad social en aras de una mayor capacidad para competir con los agricultores de otros países, responde que en realidad es un cambio de escala porque en Estados Unidos ocurre lo mismo, ya que allá los jornaleros agrícolas son mexicanos de un nivel un poco más alto que los indígenas que llegan a Sayula. El director del Departamento del Trabajo en Jalisco agrega que después de todo en Sayula las cosas no están tan mal, pues duda que el empresario pueda cumplir totalmente la ley y que la obligación de toda autoridad es cuidar la inversión privada. Quizá por eso es que el señor Ramón Murguía, líder del sindicato de oficios varios de Sayula, al ser cuestionado por la prensa sobre las condi-



ciones inhumanas en que viven muchos de los jornaleros de Sayula, dijo que "no tenemos que ser muy obre-  
ristas para que no les demos en la torre a los empresarios"  
(*Público*, 3 de septiembre de 1999).

### Consideraciones finales

En este artículo busco plasmar las diversas visiones que los actores económicos de la cuenca agrícola de Sayula, Jalisco, tienen de las actividades productivas de seis empresas hortícolas que han hecho de la producción del jitomate el principal giro de esta zona agrícola. Entre los actores que cuestionan este tipo de actividades existe un grupo que considera que las externalidades negativas de esta actividad pueden disminuir si las autoridades de todos los niveles de gobierno exigen a la agroindustria participante ciertas mejoras en sus prácticas productivas. Otro grupo, en cambio, está convencido de que la salida de las empresas jitomateras de la región es la mejor opción para el bienestar colectivo; aseguran que este tipo de agroempresarios sólo buscan maximizar sus utilidades a costa de la contaminación ambiental, por un lado, y por otro, de la explotación en condiciones inhumanas de los jornaleros migrantes.

Los agroempresarios, en cambio, aseguran que sus labores de producción son muy eficientes en el uso de los recursos naturales y que las denuncias sobre la violación a los derechos humanos de los trabajadores son exageradas. Por su parte, los dueños de las tierras que los empresarios hortícolas explotan, mediante un contrato de arrendamiento, coinciden con la posición de los empresarios, e incluso algunos agregan que cualquier tipo de degradación de los recursos sólo les incumbe a ellos.

Ahora bien, los indicadores ofrecidos por los actores económicos entrevistados son muy espontáneos y difícilmente pueden probar la veracidad de las conjeturas que ofrecen. Sin embargo, los argumentos propuestos no necesariamente son falsos. La mayoría de las afirmaciones son más bien resultado del sentido común o hipótesis creadas por los entrevistados para explicar el entorno que los rodea y que quieren sobrepasar con éxito.<sup>15</sup> Para esto último, me parece que los actores involucrados deberán reconocer la necesidad de abordar conjuntamente los problemas de una agenda que ellos mismos han ido construyendo de manera individual. La ausencia de reglas del juego que inició hace una década puede no sólo provocar el retiro de las empresas, como

insisten algunos, sino también una disminución sensible de los recursos específicos que hasta hoy han dado a la región una ventaja para competir con otros territorios.

### Notas

<sup>1</sup> Agradezco el apoyo financiero recibido de esta casa de estudios así como del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRID) de Francia (ex ORSTOM) para realizar el trabajo de campo.

<sup>2</sup> La externalidad es una situación en que las acciones de un individuo afectan positiva o negativamente a otro individuo sin compensación monetaria. El efecto es "externo" en relación con el mercado y su sistema de precios (véase Lévêque, 1998).

<sup>3</sup> En esta cifra estiman la mayoría de los técnicos entrevistados el área de la cuenca, tomando en cuenta más el número de productores y el área cultivada por cada uno de ellos que una medición formal.

<sup>4</sup> El lector interesado en la evolución de las actividades agrícolas productivas de la cuenca de Sayula, incluyendo una explicación sobre los antecedentes del cultivo de alfalfa en la zona, puede remitirse a los dos trabajos de Castillo que aparecen en la bibliografía.

<sup>5</sup> Entre las características climáticas de la cuenca de Sayula destaca la ausencia de lluvias y de heladas durante los meses de cosecha –de octubre a enero– y la baja precipitación pluvial (alrededor de 660 milímetros anuales) en el periodo de siembra y desarrollo de la planta de mayo a septiembre. En términos de la producción de jitomate para exportación, una ventaja adicional de la cuenca de Sayula es la disponibilidad de agua subterránea para irrigar el cultivo, condición sumamente importante tanto para evitar posibles sanciones de tipo fitosanitario como para que los productos tengan mayor aceptación por los consumidores de los mercados estadounidense y canadiense.

<sup>6</sup> Entre los casos que más difusión han recibido se encuentra la muerte de un trabajador en julio de 1997 a consecuencia de los efectos tóxicos del fertilizante guardado en la bodega que cuidaba durante las noches. Un año después, también se difundió la grave intoxicación por agroquímicos de tres jornaleros agrícolas, uno de los cuales, de 17 años de edad, debió ser internado en el Hospital Civil de Guadalajara pues no contaba con los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social a pesar de que desde los nueve años de edad laboraba cada temporada en el corte de hortalizas.

<sup>7</sup> Por mi parte, considero que en la explicación de este problema dejan de lado varios factores. Uno de ellos es el incremento clandestino de pozos profundos perforados de manera un tanto rudimentaria por los agricultores que antes producían alfalfa aprovechando el temporal de lluvias o la humedad residual de los suelos. Con los cultivos alternativos, principalmente el maíz para la producción de semilla híbrida, es una prioridad contar con agua al menos para los riegos de auxilio o cuando la lluvia de temporal escasea.



Otro factor explicativo se relaciona con el consumo excesivo de agua en el cultivo de brócoli producido por unos seis agricultores, quienes por ser originarios de la cuenca no son tan penalizados como ocurre con las agroempresas productoras de jitomate. Una razón más tiene que ver con la tala de la vegetación de la Sierra de Tapalpa, principal fuente de recarga de los mantos acuíferos de la cuenca de Sayula. En su parte alta, la deforestación de esta sierra se ha intensificado para abrir nuevas tierras al cultivo de la papa. En la ladera este de la sierra o pie de monte de la porción oeste de la cuenca de Sayula, la tala tiene dos orígenes. Uno es la demanda propia de las empresas señalada arriba. Otro es la roza y tumba de la vegetación de alrededor de 300 hectáreas para la plantación de agave.

<sup>8</sup> Entrevista efectuada el 28 de agosto de 1998.

<sup>9</sup> En el caso de UTSA, que también inició sus operaciones en 1999, se incorporan algunos trabajadores locales de la categoría aquí analizada, e incluso del grupo arriba citado originarios de Sinaloa, que salieron de Santa Anita porque esta empresa disminuyó sus actividades.

<sup>10</sup> De acuerdo con López (2000: 81), esta posición es la misma que asume el responsable del empaque de la empresa Rancho Alegre.

<sup>11</sup> Según esta autora, dado que el trabajador vive en su localidad y tiene el apoyo familiar aumenta su capacidad de negociación salarial y tiene mayores posibilidades de desplazarse a fuentes de trabajo alternativas. El migrante, en cambio, puesto que es llevado o llega por su cuenta a la región receptora, depende de la voluntad del patrón en cuanto a la duración de la jornada y el salario, los servicios de salud, etcétera.

<sup>12</sup> Entre ellas, ISO9002 (sistema de calidad total) e ISO14001 (sistema de administración ambiental).

<sup>13</sup> Salvo alguna otra indicación, este apartado tiene como base el trabajo de Chávez (2000), quien realizó una encuesta a una muestra de los trabajadores migrantes que laboraban con Santa Anita a fines de agosto de 1998. Como ejemplo de las dificultades para acceder a este tipo de información, la autora precisa que a ella se le permitió el acceso a uno de los campos de la empresa sin cámara de video. Para la aplicación del cuestionario no debía interrumpir la faena de los jornaleros y solamente podía entrevistar a uno de los integrantes de las cuadrillas que el cabo o jefe de la misma dispusiera.

<sup>14</sup> La Ley del Seguro Social prevé la obligación de los patrones de afiliarse a los jornaleros del campo a los servicios de salud.

<sup>15</sup> Esta situación corresponde a lo que Reyes (1998: 113-115) llama el "primer presente", que son afirmaciones y acciones que individuos mencionan sin tener tiempo ni pretensión de corroborar su veracidad.

## Bibliografía

- Barrón, Antonieta, "Las migraciones en los mercados de trabajo de cultivos intensivos en fuerza de trabajo", en Hubert C. de Grammont *et. al.*, (coords.), *Agricultura de exportación en tiempos de globalización*, México, CIESTAAM/UACH, IIS/UNAM, CIESAS y Juan Pablos Editor, México, 1999, pp. 255-283.
- Castillo G., Víctor M., "Agricultores, agroindustria y territorialidad: una triada para la competitividad", documento preparado para el foro *La mundialización económica de las regiones: competitividad, descentralización y cambios poblacionales*. celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 1, 2 y 3 de junio de 2000, bajo la coordinación del Departamento de Estudios Regionales-Ineser de la Universidad de Guadalajara; UCLA-Program on Mexico y Profmex.
- "La producción de jitomate en Sayula, Jalisco", *Agromilenio*, Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Jalisco, A.C., Guadalajara, vol. 5, núm. 2, (2000 b), pp. 9-16.
- Chávez Gutiérrez, María Rita, *Diagnóstico sobre la problemática jurídica laboral de los jornaleros migrantes del valle de Sayula*, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, 2000, documento mimeografiado.
- Lévêque, François, *Economie de la réglementation*, La Découverte, París, 1998, (colección Repères, 238).
- López Moguel, Ana Isabel, *Estrategias competitivas de producción y comercialización. El caso de las hortalizas en Sayula, Jalisco*, tesina de maestría en economía, Universidad de Guadalajara, 2000.
- Reyes Heróles, Federico, *Conocer y decidir*, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1998.

## Fuentes hemerográficas

- Tzulán, 28 de noviembre de 1998 (Sayula).  
*La Clave*, 31 de julio de 1999 (Sayula).  
*Público*, 3 de septiembre de 1999 (Guadalajara).